

por km2), periurbana (más de 50 habitantes por km2) y urbana (mayores).

Según esta zonificación, en Castilla-La Mancha existen 523 municipios en extrema despoblación, 173 en intensa despoblación y 25 en riesgo. Esto quiere decir, destaca Alique, que 721 municipios de los 919 de la región, es decir “el 78 por ciento del total”, se benefician de la Ley, y traducido a personas, el 21 por ciento de la población, lo que significa más de 438.000 personas.

Un problema no de provincias, sino de territorios

Pero es que, a raíz de los estudios realizados para articular la Ley, en una reunión del Comité Europeo de las Regiones, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió que “la lucha contra la despoblación no va de provincias, sino de territorios”, y que Europa tenía que tenerlo en cuenta en sus políticas públicas. “Consiguió que por primera vez la UE empezara a contemplar el problema de la despoblación por debajo de la provincia, idea que se apoyó por unanimidad y que la Comisión Europea tiene que estudiar”, señala Alique.

Asimismo, el comisionado destaca que la Ley tiene “vocación de continuidad en el tiempo”, algo que refleja la Estrategia frente a la Despoblación, que tiene una vigencia de 10 años (con revisiones cada 4) y que pretende contribuir a reducir “las brechas”, además de la obligación de que a partir de ahora todas las normas en Castilla-La Mancha tienen que incorporar “un informe de impacto demográfico”. Así, si una ley no impacta de forma positiva en estos territorios, tendrá que incorporar nuevas medidas.

Un 3,6% del PIB dedicado a la lucha contra la despoblación

El presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha de 2023 incorporó por primera vez esa memoria de impacto demográfico, para justificar el gasto de 1.714 millones de euros, lo que supone “el 23 por ciento del techo de gasto de la comunidad autónoma” para la lucha contra la despoblación, según destaca Alique, o lo que es lo mismo, “un 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto” de la comunidad autónoma.

Esto es importante, apunta el comisionado para el Reto Demográfico, pues son dos puntos más de que lo que contempló la propuesta de Teruel Existe en el Congreso, que instó al Gobierno central a reservar “el 1 por ciento del PIB”, unos 12.000 millones de euros, a políticas para acabar con los desequilibrios territoriales.



De cara a la próxima legislatura, de ganar, el PSOE contempla crear un fondo de 10 millones de euros “para que ninguna pyme se cree sin financiación” en estas zonas, “con condiciones ventajosas y a bajo interés”, además de “ayudas de 27.000 euros para el emprendimiento rural”.

La apuesta por la conectividad digital pasa por llevar la fibra óptica a todos los municipios, aparte de núcleos de población más pequeños, de cara a garantizar “el acceso al ocio, a la cultura, a las entidades financieras, a la teleme-

dicina, teleasistencia y teleformación”. También promoverán la “entrega a domicilio de medicamentos” para mayores y enfermos crónicos en localidades sin farmacia.

Un territorio “de oportunidades”

Pero todo no queda ahí y Jesús Alique destaca que hay que hacer “un esfuerzo reputacional”. A su juicio, Castilla-La Mancha tiene que estar “de moda” no por pertenecer a la España poco poblada, “con sus debilidades”, sino por ser “un territorio de oportunidades”, que

ofrece “calidad de vida” frente a las ciudades, y donde “se puede emprender e invertir porque se dan las condiciones”.

Esta comunidad autónoma pregona que, en sus municipios, sea cual sea su población, “se garantiza y asegura el acceso a los servicios públicos”, y que además “hay opciones de emprendimiento para la ubicación de empresas”. “Hoy la realidad de Castilla-La Mancha es muy distinta, pues con nuestra Ley se dan las condiciones para que la gente pueda decidir quedarse en el medio rural y otros puedan venir”, insiste.